

Carpeta Fiscal N° 179 - 2020

Fiscal Encargado. Rafael Enrique Zubiaur Meléndez

Escrito N 01

Sumilla. PRESENTAMOS DENUNCIA PENAL CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, LESIONES GRAVES, ABUSO DE AUTORIDAD Y ENCUBRIMIENTO REAL.

CAR 60

SEÑOR FISCAL DE TURNO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DEL DISTRITO FISCAL DE LORETO

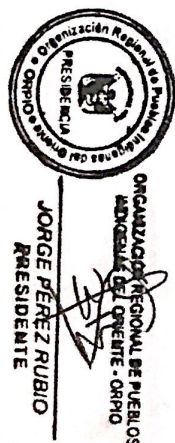
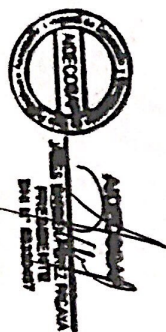


JORGE PEREZ RUBIO, identificado con DNI N° 05384225, en mi calidad de presidente de la ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DEL ORIENTE – ORPIO; JAMES PEREZ PACAYA, identificado con DNI N° 05330437, en mi condición de presidente de la ASOCIACION INDIGENA DE DESARROLLO Y CONSERVACION DEL BAJO PUINAHUA - AIDECOBAP; con domicilio procesal en nuestra oficina institucional ubicado en la Av. Del Ejercito N° 1718 – Iquitos; acudimos a su despacho con el objeto de formular denuncia penal contra los que resulten responsables por las graves atentados a los derechos fundamentales de nuestros hermanos del Puinahua, ante usted con el debido respeto, expresamos lo siguientes.

I. PRETENSION LEGAL.

- Conforme lo establece el Art. 1°, 60° Inc. 1) y 2); Art. 61° Inc. 2); 321° 322°, 326° y 329° del Nuevo Código Procesal Penal, acudimos a vuestro despacho con la finalidad de interponer Denuncia Penal, contra los que resulten responsables, por los hechos ocurridos en 08 de agosto del 2020 en conflicto socio ambiental entre la empresa petrolera PETRO TAL S.A., el Estado y las comunidades de la zona de influencia directa del Lote 95, dónde fallecieron a consecuencia de la intervención de la PNP de Requena e Iquitos, los indígenas Cocamas WILLIAN LOPEZ IJUMA, CHEMILTON FLORES CRISPIN y ELIX RUIZ ORTIZ y resultando heridos de bala los siguientes: REGIS MENDOZA CHOTA, ALDAIR MAJIN MURRIETA, WELINTON PACAYA YAHUARCANI, JACOB ESTRATA PEREIRA, GUILLEROMO RICOPA SALAS, WILDER ESTRADA RICOPA, RUSBEL FLORES PILCO, ROBIN RUIZ YAICATE, GABRIEL ALVARADO TANGO y RICHARD HARRIS CAMPOS PACAYA.

- Los delitos que debe ser investigados son: Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el Art. 108° del Código Penal, por los fallecidos WILLIAN LOPEZ IJUMA, CHEMILTON FLORES CRISPIN y ELIX RUIZ ORTIZ a consecuencia de los disparos de arma de fuego efectuado por el personal policial. Lesiones Graves, previsto y sancionado por el Art. 121° del Código Penal, en agravio de REGIS MENDOZA CHOTA, ALDAIR MAJIN MURRIETA, WELINTON PACAYA YAHUARCANI, JACOB ESTRATA PEREIRA, GUILLEROMO RICOPA SALAS, WILDER ESTRADA RICOPA, RUSBEL FLORES PILCO, ROBIN RUIZ YAICATE, GABRIEL ALVARADO TANGO y RICHARD HARRIS CAMPOS PACAYA, y otrs por identificar donde una investigación imparcial y por fiscalía especializada identifique y sobre todo les brinde garantías a los heridos de bala. Abuso de Autoridad, previsto y sancionado por el Art. 376° del Código Penal, por la intervención policial al margen de la ley que ha permitido que se



cause la muerte de tres ciudadanos indígenas y un número indeterminado de herido de bala ocurridos en las instalaciones de la empresa y en el territorio de las comunidades. ; Encubrimiento Real, previsto y sancionado en el Art. 405° del Código Penal, por haber alterado la escena del crimen y extraídos los cuerpos de los fallecidos sin intervención Fiscal, y otros.

3. Conforme a la Constitución, las normas sustantivas y adjetivas, una fiscalía especializada también deberá investigar y acreditar los tipos de autoría (autoría, autoría mediata y coautoría) conforme los establece el Art. 23 del Código Penal y la jurisprudencia que la desarrolla; en consideración que el personal que intervino pertenece a la Policía Nacional del Perú, los mismo que regulan sus funciones según los protocolos previamente establecidos, así como planes operativos, y con una estructura de mando debidamente jerarquizada. De la misma forma, se deberá investigar la posibilidad de que personal de seguridad u otros de la empresa petrolera PETRO TAL S.A., a hayan prestado auxilio para la comisión de los delitos que denunciarnos, conforme lo pree el Art. 25° del Código Penal vigente.
4. Conforme a los Arts. 92°, 93° y 95° del Código Penal; los Arts. 111° y 112° del Código Procesal Penal, la fiscalía especializada deberá investigar si concurren los presupuestos legales para incorporar a la empresa petrolera PETRO TAL S.A., como tercero civil responsable, y en su oportunidad, luego de un debido proceso, se le ordene el pago de una reparación civil solidaria con los fueran hallados responsables de la comisión de los delitos investigados y acreditados.
5. Conforme a la estructura interna de competencias y atribuciones en el sub sistema del Ministerio Publico, la presente denuncia de ser desarrollada por una FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS, el mismo que una vez recepcionado por la Fiscalía de Turno, se derivara a la que tiene esas atribuciones; o en su defecto al Presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal, a fin de que dentro de sus funciones y en coordinación con la Fiscalía de Nación, designen a un fiscal Ad Hoc que este revestido de todas las funciones y competencias para investigar estos graves hechos.

II. PERSONAS A QUIENES SE DEBE INVESTIGAR PARA ESTABLECER GRADO DE AUTORIA Y PARTICIPACIÓN.

6. El personal policial que habría participado del operativo a quienes deberá notificarse a su centro laboral de la Comisaria de Requena, o en su defecto a la Oficina de Recursos Humanos o personal policial del MINITER; son:

- MAYOR PNP JUAN FLORES YANQUI
- S2 PNP ANGEL GAMBOA FLORES
- S3 PNP MICKY ANGEL PINCHE GUZMAN
- S3 PEDRO ANDRES FLORES RIOS
- S3 ADAILTON KAREMBEU FLORES ACOSTA
- S3 WELINTON GUERRA SALAS
- S3 JORGE CESAR CHAVEZ MOZOMBITE
- S3 JHON OCHOA CORONADO
- S3 ERNESTO LAMBERT NAVARRO MACEDO
- S3 DANIEL CARDENAS ALENCAR
- S3 ALEXANDER ACUÑA VILLACREZ
- S3 PAUL ENRIQUE GERALDY GUTIERREZ PINEDO



ADJUDICADO
JESUS RAMON PUEZ RIVERA
PRESIDENTE
DM 17-EST-007



ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUESTOS DE TRABAJO
MINISTERIO DEL INTERIOR - GRUPO
JORGE PÉREZ RUBIO
PRESIDENTE

- S3 FRANK TAMANI HUAYMACARI
- S3 PAUL GUERRA CANAQUIRI
- ST1 AVELINDA RUIZ GUTIERREZ
- S1 EDIN RUIZ NUBE
- S2 ROYBER MELENDEZ PACAYA
- S2 ELIO WOLTAIRE MONTES CADILLO
- S2 LARRY GUIDO VALERA SEPULVEDA
- S2 JHON CARDOSO VARGAS
- S2 JHON CARDOSO VARGAS
- S2 DANNY PAUL BANDAM DEL AGUILA
- S2 SUMBER RAMIREZ SILVA
- S2 EULER ENRIQUE PINEDO
- S2 DAVID SANCHEZ DIAZ
- S3 LUIS ANGEL RAYGADA MONCEBAY
- S3 ABEL ALVARADO ARIZA
- S3 SANTIAGO SAAVEDRA RIOS
- S3 CYNDY BELGICA CELIS CAHUAZA
- S3 JUNIOR MARTINEZ SALAS
- S3 RAY BRITT VELA VAQUERO
- S3 DANIEL VELASOSA MAS
- S3 NESTOR ALVEAR SONEO
- S3 JHON TORRES PANDURO
- S3 JOSE JULIO FLORES TENAZOA
- S3 VICTOR GONZALES SHAPIAMA
- S3 JOSE JORGE GARCIA LAO
- S3 MIGUEL BARDALES CHICHIPE

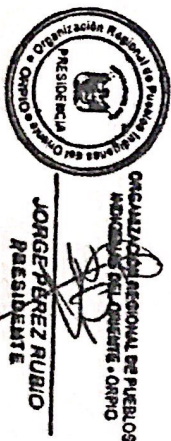
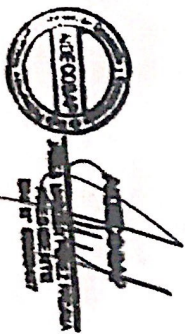
7. El personal de la empresa petrolera que deberá comparecer al despacho fiscal para prestar sus declaraciones a quienes se les deberá notificar en la sede de la empresa - domicilio laboral ubicado en la zona de operaciones en Bretaña.

- VICTOR OROZCO ZEVALLOS, Gerente de Operaciones de PETROTAL
- GINO RENZO ROBERTI VIDAL, Representante Legal de PETROTAL
- THATINA PEREZ FALCON, Supervisora del Área Social de PETROTAL

Y todas las personas que por medio de los actos de investigación a realizarse el Ministerio Público considere pertinente su concurrencia.

III. ANTECEDENTES.

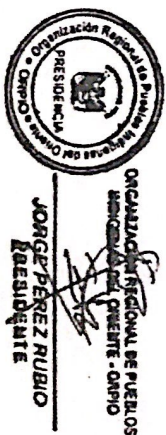
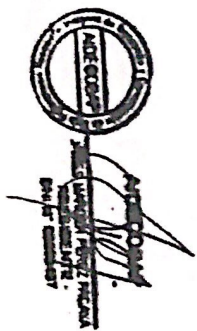
8. Señor Fiscal, un conflicto socio ambiental ocurre cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre la distribución de determinados elementos materiales o simbólicos vinculados al control, uso y acceso de recursos naturales y del ambiente, perciben que satisfacer los intereses de uno implica necesariamente que el otro no lo haga, y confrontan basándose en esas incompatibilidades. Y es de público conocimiento que la región de Loreto esta conflictividad se da entre las empresas que desarrollan actividades extractivas (petróleo principalmente) y los pueblos originarios que viven en el entorno de las concesiones promovidas y autorizadas por el Estado.



9. La precariedad de las condiciones de vida de los pueblos indígenas se refleja en la carencia de servicios públicos básicos, como el agua potable, energía eléctrica, salud, educación, telecomunicaciones, entre otros servicios, necesarios para su dignidad, libre desarrollo y dignidad. Estas condiciones que sumergen a dichos pueblos en la extrema pobreza, no ha cambiado a pesar de que, en muchas ocasiones, han aceptado de buena fe la realización de actividades extractivas. Siendo la acción deficiente del Estado, uno de los motivos de permanentes conflictos sociales.
10. Uno de los conflictos sociales sin solución a la fecha, es la explotación petrolera de la empresa petrolera PETROTAL, en el Lote 95, ubicado en Bretaña, capital del distrito de Puinahua en la provincia de Requena, Loreto, donde habitan diversas comunidades indígenas y nativas. El 24 de marzo de 2019, miembros de la comunidad indígena de Bretaña tomaron la estación del Lote 95, pero luego del diálogo con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acordaron deponer su medida de protesta. La situación de pobreza y pobreza extrema de los pueblos indígenas de Bretaña, y en todo el país, se agudizó además por la falta de atención en salud y la muerte a causa del COVID-19.

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

11. El 8 de agosto del presente año, esta situación de abandono e indolencia, generó una movilización social pacífica de diversas comunidades indígenas y nativas asentadas en Bretaña, con el fin de manifestar su rechazo por la desidia de PETROTAL y el Estado en la atención de sus demandas. Alrededor de 70 comuneros se desplazaron hasta las instalaciones de la empresa y se reunieron con los representantes de la misma, aunque no lograron ponerse de acuerdo, en ningún momento se avizoraba actos de violencia.
12. Sin embargo, por razones aún no investigadas por el Ministerio Público conforme lo ordena la Constitución, el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, luego de dicha reunión los comuneros fueron reprimidos por la Policía Nacional con armas de fuego, pese a que ellos solo contaban con sus lanzas culturales y palos, exigiendo diálogo.
13. Además, previo a los eventos lamentables, ellos estaban en conversaciones con el Gerente de Producción y la Coordinadora de Relaciones Comunitarias, donde los manifestantes estaban informando de sus propósitos y demandas en medio de la confusión, se dio la balacera y la Policía disparó a quemarropa.
14. Este acto de barbarie en contra de los pueblos indígenas, trajo como consecuencia la muerte de los indígenas WILLIAM LÓPEZ UUMA (37), CHEMILTON FLORES CRISPÍN (29) Y ELIX RUÍZ ORTÍZ (37), y otros 10 indígenas resultaron heridos. De acuerdo con los certificados de necropsia de los 3 hermanos indígenas murieron arrojaron impactos de proyectiles de armas de fuego. "El primero recibió disparos en el abdomen y el tórax, que le perforaron el estómago y el pulmón izquierdo; mientras que a FLORES los balazos le alcanzaron la pelvis y el muslo derecho, en el caso de RUÍZ, estaba muy grave y no resistió



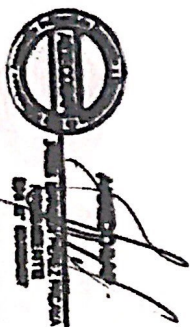
la operación que se le realizó, también, por herida de arma de fuego en el abdomen. Los heridos de bala identificados en un número de 10 personas son: REGIS MENDOZA CHOTA, ALDAIR MAJIN MURRIETA, WELINTON PACAYA YAHUARCANI, JACOB ESTRATA PEREIRA, GUILLEROMO RICOPA SALAS, WILDER ESTRADA RICOPA, RUSBEL FLORES PILCO, ROBIN RUIZ YAICATE, GABRIEL ALVARADO TANGOYA y RICHARD HARRIS CAMPOS PACAYA.

15. Los hechos sucedidos el 08 de agosto del 2020 a la fecha no son investigados por una fiscalía competente y especializada. Lo que existe es una investigación a nivel preliminar recaída en la Carpeta Fiscal N° 179-2020 - Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena, a cargo del Sr. Fiscal ENRIQUE ZUBIAUR MELÉNDEZ, quien en las seis disposiciones emitidas su investigación está orientada a recabar información conforme a la Casación N° 318-2011 sobre los delitos de Disturbios, previsto en el art. 315° Inc. 2 y 3 del CP; contra la Salud Pública, en la modalidad de Violación de las Medidas Sanitarias, previsto en el Art. 292 del CP; y Homicidio Culposos, previsto en el art. 111° 1er párrafo del CP. Como se podrá apreciar, los hechos de la muerte de los tres indígenas kukamas no se están investigando como tal, tampoco el hecho de la existencia de los 10 heridos de bala. Y menos lo sucedido con los cuerpos de los fallecidos en el acto y que sus cadáveres fueron trasladados de manera irregular alterando de esta manera no solo la escena del crimen, sino que tratando de ocultar las reales circunstancias de los graves hechos.

16. Esta omisión contraviene lo establecido en el Inciso 1 del Artículo 330° donde señala que el Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria. Y el inciso 2 indica que las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlos debidamente. Lo que existe por el contrario es todo una estrategia de dejar impune lo sucedido el 08 de agosto y por el contrario dirigir toda la persecución penal en contra de los indígenas que en esa fecha ejercieron su derecho constitucional a la legítima protesta.

17. Señor Fiscal, es de público conocimiento que, frente a las muertes de JACK BRIAN PINTADO SANCHEZ y JORDAN INTI SOTELO CAMARGO ocurridas el 11 de noviembre en medio de las protestas sociales ampliamente difundidas, el expresidente peruano Manuel Merino fue denunciado penalmente junto con él su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y ministro del Interior Gastón Rodríguez, así como a los jefes de la Policía Nacional por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones. La denuncia se realizó el 15 de noviembre del 2020, a cuatro días de ocurrido el hecho, con imputaciones concretas por graves violaciones a los derechos humanos.

18. Un Estado que defiende a la persona humana y el respeto de su dignidad, no debe permitir las muertes de personas sin castigo, más aún en el caso de las comunidades indígenas y nativas, cuyo nivel de indefensión es permanente. Una democracia con impunidad, no es



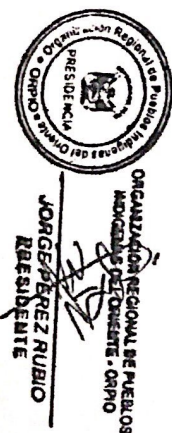
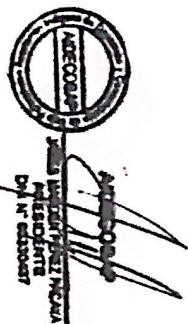
democracia. En consecuencia, el asesinato de los 3 hermanos del pueblo Kukama, y los 10 heridos de bala por reclamar sus derechos y el cumplimiento de compromisos suscritos por las propias autoridades del gobierno nacional, no debe quedar impune ni en el olvido, en consecuencia, resulta indispensable realice una investigación exhaustiva de las circunstancias de estas muertes, para llegar hasta los responsables operativos y aquellos que ordenaron este crimen de Estado.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

19. El Art. 1°, 60° Inc. 1) y 2); Art. 61° Inc. 2); 321° 322°, 326° y 329° del Nuevo Código Procesal Penal, Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el Art. 108° del Código Penal, por los fallecidos **WILLIAN LOPEZ UUMA, CHEMILTON FLORES CRISPIN y ELIX RUIZ ORTIZ** a consecuencia de los disparos de arma de fuego efectuado por el personal policial. Lesiones Graves, previsto y sancionado por el Art. 121° del Código Penal, en agravio de **REGIS MENDOZA CHOTA, ALDAIR MAJIN MURRIETA, WELINTON PACAYA YAHUARCANI, JACOB ESTRATA PEREIRA, GUILLEROMO RICOPA SALAS, WILDER ESTRADA RICOPA, RUSBEL FLORES PILCO, ROBIN RUIZ YAICATE, GABRIEL ALVARADO TANGO y RICHARD HARRIS CAMPOS PACAYA**, y otros por identificar. Abuso de Autoridad, previsto y sancionado por el Art. 376° del Código Penal, por la intervención policial al margen de la ley que ha permitido que se cause la muerte de tres ciudadanos indígenas y un número indeterminado de herido de bala ocurridos en las instalaciones de la empresa y en el territorio de las comunidades. Encubrimiento Real, previsto y sancionado en el Art. 405° del Código Penal, por haber alterado la escena del crimen y extraídos los cuerpos de los fallecidos sin intervención Fiscal, y otros.
20. Conforme a la Constitución, las normas sustantivas y adjetivas, se deberá investigar y acreditar los tipos de autoría (autoría, autoría mediata y coautoría) conforme los establece el Art. 23 del Código Penal y la jurisprudencia que la desarrolla; en consideración que el personal que intervino pertenece a la Policía Nacional del Perú, los mismo que regulan sus funciones según los protocolos previamente establecidos, así como planes operativos, y con una estructura de mando debidamente jerarquizada. De la misma forma, se deberá investigar la posibilidad de que personal de seguridad u otros de la empresa petrolera PETRO TAL S.A., a hayan prestado auxilio para la comisión de los delitos que denunciarnos, conforme lo pree el Art. 25° del Código Penal vigente.

VI. ACTOS DE INVESTIGACION NECESARIOS Y URGENTES PARA ESTABLECER GRADOS DE AUTORIA, PARTICIPACION Y ESTABLECER LA REPARACION CIVIL Y AL TERCERO CIVIL RESPONSABLE.

- a) Oficiar a la Fiscalía de Requena Carpeta Fiscal N° 179-2020 a fin de que remita copias certificadas de toda la investigación avanzada a la fecha, donde obran los protocolos de necropsia, certificados de defunción, los certificados médicos legales de los heridos de bala, la identificación de las viudas, videos, etc.
- b) Visualización urgente de los videos recabado por la Fiscalía de Requena.
- c) Inspección fiscal con la presencia de los heridos de bala y las viudas de los fallecidos.
- d) Declaración del personal policial que participo y la identificación de la línea de mando del operativo policial.
- e) Identificación de todo el personal de seguridad de la empresa PETROTAL.



- f) Oficiar al Departamento de Inspectoría de la PNP en el MININTER, con el objeto de recabar la investigación funcional al personal que participo del operativo.

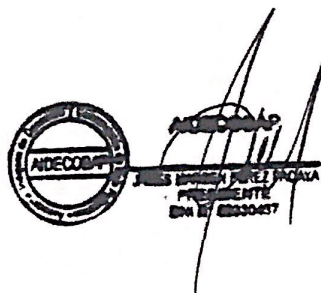
VII. ANEXOS DE LA DENUNCIA

- A-01 Copia simple de los documentos de identidad de los denunciados.
- A-02 Copia simple de las copias literales de la acreditación de representación indígena; AIDECOBAP Y ORPIO.
- A-03 Disposición Fiscal N° 01, 02, 03, 05 y 06 de la Carpeta Fiscal N° 179-2020 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena.
- A-04 Fotografías circuladas en los medios de comunicación de lo sucedido el 08 de agosto del 2020.

POR TANTO:

A UD. Sr. Fiscal, pedimos tramitar el presente conforme a Ley.

Iquitos – Maynas, 07 de diciembre del 2020.



ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS
INDÍGENAS DEL ORIENTE - ORPIO

JORGE PÉREZ RUBIO
PRESIDENTE

.....
Jorge W. Tacuri Aragón
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 37677